



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE: 20.983/2022

“BERCLEAN SA c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto:

EL DOCTOR WALTER CARNOTA DIJO:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de la Sala en virtud de la impugnación de deuda presentada por BERCLEAN SA contra la resolución administrativa 2343-E-2021 por la cual se le reclaman diferencias de contribuciones patronales, por incorrecto encuadre de las disposiciones establecidas en el artículo 2do. del Decreto 814/2001, correspondiente a los períodos 06/2012 a 04/2019, por un total de \$ 153.024.177,24 (en concepto de capital, \$ 45.00.800,87 en concepto de intereses \$ 97.742.264,99 y una multa por infracción al punto 1º inciso e. del artículo 15 de la ley 17.250 limitada al periodo 6/2012 a 10/2015 por un total de \$ 10.280.111,38, según surge del escrito de impugnación presentado).

Desde el punto de vista formal propiciare la habilitación de la instancia judicial por cuanto si bien en nuestro derecho positivo, la regla solve et repete ha sido considerada congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la CN y 8º del Pacto de San José de Costa Rica, el más Alto Tribunal de la Nación dispuso atenuar su rigurosidad en aquellos casos en que exista una desproporcionada magnitud entre la suma que el contribuyente debe ingresar y su concreta capacidad económica (conf. CSJN 21/12/89 “Micrómnibus Barrancas de Belgrano” Fallo 312:2490; 11/06/98 “Cadesu Cooperativa de Trabajo Ltda. c/DGI” Fallo 312:1741; 02/08/05 “Centro Diagnóstico de Virus SRL c/AFIP” Fallo 328:2938). Precisamente, el apelante en su escrito de impugnación expresa que se encuentra imposibilitado de dar cumplimiento a la exigencia del depósito previo dado lo desproporcionado del monto reclamado y su real capacidad económico financiera.

A efecto de acreditar tal aserto acompaña un informe contable sobre la capacidad financiera de la empresa, certificado por el consejo profesional de ciencias económicas de Córdoba. Explica en su memorial que dado el contexto económico por el que atraviesa le resulta imposible la obtención de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

financiamiento externo lo que sumado a la profunda carga impositiva que debe afrontar, las cargas sociales, los compromisos financieros y el pago de los haberes se genera una situación de altísimo riesgo colocando a la firma al borde de la cesación de pagos y con ello ante la posibilidad no querida de cerrar sus puertas dejando 1.147 personas sin empleo (ver escrito de impugnación).

La parte demandada rechaza los agravios vertidos. Sostiene que el único parámetro que debe tomarse en consideración a los efectos de determinar si un empleador encuadra en el inciso a. o b. del art. 2° del Decreto 814/2001 es su monto de facturación anual, sin perjuicio de la caracterización que le corresponda en el marco de las normas de fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas. El importe a considerar a los fines de determinar si el empleador deberá tributar de acuerdo con uno y otro inciso, es el de \$ 48.000.000 establecido por el Decreto N° 1009/01, excedido el cual debió haberse utilizado la alícuota prevista en el inciso a) del artículo 2do. Del decreto 814/2001. Afirma que ese límite por el momento no ha sido modificado hasta que el PEN disponga lo contrario.

Entiendo que asiste razón a la impugnante.

Del juego armónico de las resoluciones y decretos aplicables surge que el decreto 1009/2001 ha variado sustancialmente el contenido de la Resolución 24/01 de la SEPyME y también los montos a partir de los cuales corresponde aplicar la alícuota numérica aplicable en concepto de contribuciones patronales. Ello como consecuencia del proceso inflacionario que desde hace mucho tiempo azota nuestro país.

Si bien el beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01, que estableció la definición de PYME por remisión a la Resolución N° 24/2001. Esta última, a través de su artículo 1°, dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella establecidos. A posteriori dichos montos fueron actualizados en virtud de distintas resoluciones dictadas por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (así: 147/2006, 21/2010, 50/2013, 357/2015, 11/2016, 103-E/2017, 154/2018, 220/2019) para evitar la desnaturalización del espíritu de la ley cuyo objetivo era promover el desarrollo de las PYMES.

En virtud de lo anterior entiendo que el encuadramiento de PYME quedará esclarecido si la facturación de la infraccionada arroja un monto inferior al límite establecido por las resoluciones antes citadas que correspondan al periodo por el cual se efectuaron los cargos.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por mayoritaria jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala III del 11/05/2009 “Codimat SA c/AFIP -DGI s/Impugnación de deuda”, Sala I sent. del 23/02/2015 “Salud y Belleza SA c/AFIP s/Impugnación de deuda”).

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformado por la ley 27.430. También la ley 27541, vigente desde el 23 de diciembre de 2019, introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las contribuciones patronales mediante la derogación de los decretos 814/2001, 1.009/2001 y artículo 173 de la ley 27.430.

Ello así el análisis efectuado se acota al periodo del cargo, revocándose la resolución recurrida en los términos indicados.

En cuanto a los honorarios, teniendo presente que la ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica dado que dicho cuerpo legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderada por los jueces bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (CSJN Fallos 257:142; 296:126; 302:534 y sus citas; 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 250 UMA (\$ 3.733.250) conf. CSJN Acordada 09/2023, importe al que se adicionará IVA en caso de corresponder (conf. CSJN “Compañía General de Combustibles SA s/recurso de apelación” Fallos 316:1523). Con respecto a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte demandada, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 2º de la ley 27.423.

Por lo expuesto propongo se declare habilitada la instancia judicial haciendo lugar al recurso de apelación presentado y revocando la resolución recurrida. Las costas deberán imponerse al organismo actuante (art. 68 CPCCN). Con respecto a los honorarios de representación letrada de la parte actora se regulan en 250 UMA (\$ 3.733.250) conf. CSJN Acordada 09/2023, importe al que se adicionará IVA en caso de corresponder. Con respecto a los honorarios de representación letrada de la parte demandada, estese a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423.

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Walter F. Carnota.

Fecha de firma: 05/04/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#36579248#354234895#20230405130019670



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Por lo expuesto el Tribunal **RESUELVE:** 1º) Declarar habilitada la presente instancia judicial, 2º) Hacer lugar al recurso de apelación presentado, 3º) Revocar la resolución recurrida, 4º) Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN), 5º) Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 250 UMA (\$ 3.733.250) conf. CSJN Acordada 09/2023, importe al que se adicionará IVA en caso de corresponder. Con respecto a los honorarios correspondientes a la dirección letrada de la parte demandada deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423. Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

La Dra. Nora Carmen Dorado no vota por haberse excusado.

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

